

Señor:

ALEXANDER KANDIA RAMIREZ

Juzgado Doce (12) Penal Municipal de Conocimiento de Bogotá D.C.

E. S. D.

Ref. Acción Constitucional de Tutela – incidente de desacato

Accionante: Wilson Gerley Cárdenas Nonsoque en representación de Libia Méndez

Accionado: BBVA Seguros Colombia S.A., y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A. (BBVA COLOMBIA)

Radicado: 1100140880712023-00017-00

Asunto: Incidente de Desacato

Respetado señor Juez:

WILSON GERLEY CÁRDENAS NONSOQUE, Identificado con la cédula de ciudadanía número 80.732.534 de Bogotá D.C., abogado en ejercicio y portador de la tarjeta profesional número 158.006 del Consejo Superior de la Judicatura, en mi calidad de en mi calidad de apoderado especial de la señora LIBIA MÉNDEZ, mayor de edad, domiciliada y residente en la ciudad de Bogotá D.C., identificada con cédula de ciudadanía número 41.445.363 de Bogotá, conforme con el poder otorgado, por medio del presente escrito comparezco en ejercicio del derecho consagrado en el artículo 86 de la Constitución Política y concurre ante su despacho con el fin de instaurar Incidente de Desacato, en contra de BBVA SEGUROS COLOMBIA S.A., y BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. (BBVA COLOMBIA), por el incumplimiento del fallo de la acción constitucional de tutela de la referencia, que fue resuelta por este despacho, a fin que mediante la presente acción se proteja mi derecho fundamental de petición contenido en el artículo 23 de la Constitución, en concordancia con los siguientes:

I. HECHOS

1.1. SAÚL ANTONIO MARTÍNEZ NÚÑEZ, (Q.E.P.D.) quien en vida con cédula de ciudadanía número 3.043.631 y su esposa, LIBIA MÉNDEZ identificada con cédula de ciudadanía número 41.445363 de Bogotá D.C., domiciliada y residente en la misma; adquirieron una obligación con la entidad bancaria BANCOLOMBIA S.A.

1.2. Tal obligación fue subrogada al BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA - BBVA, quien a la fecha continua como acreedor titular de la misma bajo el N.º 0013346509600099658.

1.3. SAÚL ANTONIO MARTÍNEZ NÚÑEZ, identificado en vida como se mencionó anteriormente, falleció el día 03 de enero de 2019, en la ciudad de Bogotá, donde tuvo su último domicilio.

1.4. Con ocasión del fallecimiento de su esposo, LIBIA MÉNDEZ permaneció como única titular de la obligación contraída al igual que se convirtió en única beneficiaria del seguro de vida.

1.5. Mediante solicitud de pago de siniestro radicada el día 26 de septiembre de 2019, se aportó la debida y completa documentación para el pago del siniestro, informando dirección y correo electrónico para su correspondiente notificación.

1.6. En virtud del silencio por parte de la entidad de seguros, el pasado 24 de diciembre se reiteró la misma a través de un derecho de petición, solicitando *"copia de respuesta formal a la petición de pago radicada el día 26 de septiembre de 2019, con número de siniestro 1794500, debido a que a la fecha de esta petición no se allega notificación electrónica o física con respuesta a la misma, en contravía de lo reglado por el artículo 1080 del Código de Comercio"*

1.7. La segunda petición tampoco obtuvo respuesta.

1.8. Se instauró acción de tutela y con ello se obtuvo una respuesta en la cual el 10 de agosto de 2020, BBVA Seguros informó: *"Una vez analizados los documentos soporte y realizado el respectivo control de cartera, hemos evidenciado que el Seguro de Vida Deudores que ampara el crédito N.º 00130346509600099658, se encuentra cancelado desde 27 de noviembre de 2018, lo que nos indica la inexistencia de cobertura" ...*

1.9. Se instauró el día 08 de febrero de 2021 una nueva petición solicitando fuera remitida la comunicación mediante la cual se realizó la supuesta revocatoria del seguro, con la correspondiente constancia de recibido del cliente.

1.10. Mediante sentencia del 24 de marzo de 2023, el Juzgado Doce Penal Municipal de Conocimiento de Bogotá D.C., notificada el 28 de marzo de la misma anualidad, se concedió acción de tutela en los términos:

RESUELVE

PRIMERO: CONCEDER la presente acción de tutela presentada por el doctor **WILSON HERLEY CARDENAS NONSOQUE** en representación de **LIBIA MENDEZ** contra **BBVA SEGUROS COLOMBIA S.A** y **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A**, en los términos señalados en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ORDENAR al **Representante Legal de BBVA SEGUROS COLOMBIA S.A**, que en el término improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificación del presente proveído, proceda a suministrar una respuesta clara, completa y de fondo al doctor **WILSON GERLEY CARDENAS NONSOQUE en representación de LIBIA MENDEZ**, frente a la petición presentada el día 08 de febrero de 2021, debiéndose pronunciar de manera concreta acerca de todas y cada una de las solicitudes incoadas, notificando la misma a la dirección Carrera 12 No. 71 – 32 Oficina 401, Edificio Grupo 71 de la ciudad de Bogotá D.C y/o en los correos electrónicos wilson.cardenas@rcfclegal.com o notificaciones@rcfclegal.com

1.11. El día 28 de marzo de 2023, BBVA seguros dio la misma respuesta que en la anterior ocasión, incompleta, sin llegar al fonde del asunto y sin explicaciones de la negación a entregar respuesta clara y precisa (se anexa a este recurso).

1.12 A la fecha, la accionada no ha dado cabal cumplimiento a la orden judicial contenida en el fallo del día 6 de febrero de 2023 y ya se agotó el término otorgado por el señor juez para su cumplimiento.

II. PETICIONES

2.1. Solicito que se disponga en término inmediato a la entidad demandada el cumplimiento y el acatamiento de lo ordenado por su Despacho en la Tutela citada como referencia.

2.2. Iniciar incidente de desacato en contra de BBVA SEGUROS COLOMBIA S.A., y BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. (BBVA COLOMBIA), su representante o quien haga sus veces, para que dé cumplimiento y acate lo ordenado por su despacho en la tutela citada como referencia.

2.3 Ordenar el arresto del Representante legal de BBVA SEGUROS COLOMBIA S.A., y BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. (BBVA COLOMBIA) la, el señor SERGIO SÁNCHEZ ANGARITA y MARIO PARDO BAYONA, o quienes hagan sus veces, por el desacato a la orden impartida en la tutela de la referencia, el día 24 de marzo de 2023.

2.4 Imponga multa de 20 SMMLV a los señores SERGIO SÁNCHEZ ANGARITA y MARIO PARDO BAYONA, o quienes hagan sus veces.

2.5 Inicie el correspondiente procedimiento sancionatorio, requiriendo a su superior jerárquico para que inicie las sanciones de materia, disciplinario, penal, administrativo, compulse copias e interponga las multas y sanciones correspondientes de comprobar la responsabilidad de la accionada y las personas responsables de acatar y dar cumplimiento al fallo de tutela de la referencia.

III. FUNDAMENTOS DE DERECHO

Con el respeto debido, me permito exponer las razones de derecho que le asisten al caso, en aras de exigir la autoridad coercitiva del juez para hacer cumplir sus decisiones, en busca de hacer efectivas sus decisiones, con base en el poder del que fue investido por el estado para lograr los fines esenciales del estado y salvaguardar los derechos de los ciudadanos que se encuentran vulnerados a fin de lograr la justicia, ya que de no obligar a la ejecución de la sentencia, se continuará avasallando de forma repetitiva los derechos de mi representada, una mujer viuda sufriendo los caprichos y atropello de sus derechos por parte del BBVA SEGUROS S.A.

3.1. De la procedencia del incidente.

Es menester recordar que pese a la diferente naturaleza entre el cumplimiento de la orden judicial y el incidente de desacato, estos no son excluyentes e incluso procede de oficio para el juez, el verificar el cumplimiento de la orden impartida, lo cual es parte de la responsabilidad objetiva, en cambio el incidente de desacato busca la verificación y sanciones por responsabilidad subjetiva de quienes debían acatar la orden del juez, y aun así hacer que esta se cumpla o se den las razones por las cuales no se ha cumplido, ha mencionado en ese sentido la Corte Constitucional en Sentencia T 459 de 2003:

"...El juez puede sancionar por desacato al responsable y al superior hasta que cumplan su sentencia. La facultad para sancionar por desacato es una opción que tiene el juez frente al incumplimiento, pero no puede confundirse en manera alguna con la potestad que tiene para hacer efectiva la orden de tutela. Es decir, el juez puede adelantar el incidente de desacato y sancionar a o los responsables y simultáneamente puede adelantar las diligencias tendientes a obtener el cumplimiento de la orden. Un trámite no excluye al otro y de igual manera la competencia para hacer efectivo el cumplimiento de la orden no es requisito necesario ni previo para poder imponer la sanción. Luego no le asiste razón a la peticionaria cuando alega que el Tribunal Superior del Distrito Judicial debió haber requerido a su superior para efectos de hacer cumplir el fallo antes de iniciar el trámite del desacato..."

En la sentencia de referencia, continuó exponiendo la corte lo siguiente:

"...Ya la Corte ha señalado, conforme a lo dispuesto en el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991, cuáles son los pasos que le corresponde al juez agotar en caso de que, dentro del término señalado en el fallo, se incumpla la orden dada. Así, ha sostenido que (1) debe dirigirse al superior del responsable con el fin de requerirlo para que haga cumplir la sentencia y abra el correspondiente proceso disciplinario contra aquél; (2) si luego de transcurridas 48 horas a partir del requerimiento no se ha cumplido con lo ordenado, ordenará abrir proceso contra el superior, y (3) en ese mismo momento adoptará directamente todas las medidas para el cabal cumplimiento del fallo.

Adicionalmente, el juez puede sancionar por desacato al responsable y al superior hasta que cumplan su sentencia.

4.2. De acuerdo con lo anterior, la facultad para sancionar por desacato es una opción que tiene el juez frente al incumplimiento, pero no puede confundirse en manera alguna con la potestad que tiene para hacer efectiva la orden de tutela. Es decir, el juez puede adelantar el incidente de desacato y sancionar a o los responsables y simultáneamente puede adelantar las diligencias tendientes a obtener el cumplimiento de la orden. Un trámite no excluye al otro y de igual manera la competencia para hacer efectivo el cumplimiento de la orden no es requisito necesario ni previo para poder imponer la sanción. Luego no le asiste razón a la peticionaria cuando alega que el Tribunal Superior del Distrito Judicial debió haber requerido a su superior para efectos de hacer cumplir el fallo antes de iniciar el trámite del desacato..." (Resaltado propio)

De otro lado, la legislación nacional e internacional integrada al bloque de constitucionalidad, es extensa y clara sobre lo procedente de la acción aquí incoada porque con ella se hace efectivo y real la justicia interna. Los jueces están revestidos de autoridad para hacer valer sus providencias, de otro modo, cada decisión solo sería una ilusión y la soberanía un elemento fundamental del Estado, se perdería, generando así un desorden social al no cumplir la finalidad del estado, que es la protección de los derechos y libertades de sus asociados.

Al respecto indica la constitución política de 1991:

ARTICULO 86: *Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública.*

La protección consistirá en una orden para que aquel respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo. **El fallo, que será de inmediato cumplimiento**, podrá impugnarse ante el juez competente y, en todo caso, éste lo remitirá a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

En ningún caso podrán transcurrir más de diez días entre la solicitud de tutela y su resolución.

La ley establecerá los casos en los que la acción de tutela procede contra particulares encargados de la prestación de un servicio público o cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo, o respecto de quienes el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión.

ARTICULO 87. Toda persona podrá acudir ante la autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una ley o un acto administrativo.

En caso de prosperar la acción, **la sentencia ordenará a la autoridad renuente el cumplimiento del deber omitido**

ARTICULO 93. Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno.

Los derechos y deberes consagrados en esta Carta se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia.

Siguiendo la integración normativa de igual fuerza y hasta superior, anoto lo que indica el Pacto de San José):

Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Artículo 25 Protección Judicial 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. **2. Los Estados Parte se comprometen: a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) a desarrollar las posibilidades del recurso judicial, y c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.**

3.2. De las sanciones a que hay lugar.

En análisis específico de la procedencia del recurso y las sanciones que pueden hacer que la decisión judicial sea efectiva y real, tenemos:

DECRETO 306 DE 1992

Artículo 9º Imposición de sanciones. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, cuando de acuerdo con la Constitución o la Ley el funcionario que haya incumplido una orden proferida por el juez sólo puede ser sancionado por determinada autoridad pública, el juez remitirá a dicha

autoridad copia de lo actuado para que ésta adopte la decisión que corresponda.

En el Decreto 2591 de 1991, se establece en el capítulo V “sanciones”, en el artículo 52 plasma:

ARTICULO 52. DESACATO. La persona que incumpliére una orden de un juez proferida con base en el presente Decreto incurrirá en desacato sancionable con arresto hasta de seis meses y multa hasta de 20 salarios mínimos mensuales salvo que en este Decreto ya se hubiere señalado una consecuencia jurídica distinta y sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar.

La sanción será impuesta por el mismo juez mediante trámite incidental y será consultada al superior jerárquico quien decidirá dentro de los tres días siguientes si debe revocarse la sanción.

ARTICULO 53. SANCIONES PENALES. El que incumpla el fallo de tutela o el juez que incumpla las funciones que le son propias de conformidad con este **Decreto incurrirá, según el caso, en fraude a resolución judicial, prevaricato por omisión o en las sanciones penales a que hubiere lugar.**

También incurrirá en la responsabilidad penal a que hubiere lugar quien repita la acción o la omisión que motivó la tutela concedida mediante fallo ejecutoriado en proceso en el cual haya sido parte.

De tal modo que las condenas solicitadas son jurídicas y están dentro de las facultades que le imparte la ley a usted señora juez de conocimiento de la acción constitucional de tutela y del desacato de la orden contenida en el fallo que profirió.

En cuanto a los pronunciamientos del máximo órgano protector y garante de la Constitución, la Corte Constitucional, en la sentencia C-367 de 2014, expuso:

“(…), incumplir la orden dada por el juez constitucional en un fallo de tutela es una conducta de suma gravedad, porque (i) prolonga la vulneración o amenaza de un derecho fundamental tutelado y (ii) constituye un nuevo agravio frente a los derechos fundamentales a un debido proceso y de acceso a la justicia.

4.3.2. Ante la orden impartida en un fallo de tutela su destinatario tiene dos opciones: una, que es la regla, cumplirla de manera inmediata y adecuada (art. 86 CP) y, dos, que es la excepción, probar de manera inmediata, eficiente, clara y definitiva la imposibilidad de cumplirla.”(Resaltado propio)

De igual forma, la sala tercera de revisión de la Corte Constitucional, mediante Auto N.º 275 DE 2011, señaló:

“...2. Esta Corporación ha sostenido que en virtud de lo establecido en los artículos 23 y 52 del Decreto 2591 de 1991, la competencia para verificar y hacer cumplir las órdenes emitidas en un fallo de tutela, por regla general, es del juez de primera instancia, incluso si se trata de órdenes proferidas en segunda instancia o en sede de revisión¹¹. Es éste “(…) el encargado de hacer cumplir la orden impartida así provenga de fallo de segunda instancia o de revisión, ya que mantiene la competencia hasta tanto no se cumpla la orden a cabalidad”...

3.3. De la respuesta a las peticiones.

La entidad accionada no ha contestado de fondo, de forma clara la petición elevada y por tanto ha desacatado la orden judicial del a quo. BBVA SEGUROS S.A., aún no contesta conforme con lo solicitado y lo estipulado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional en Sentencia T-230 de 2020:

Respuesta de fondo. Otro componente del núcleo esencial supone que la contestación a los derechos de petición debe observar ciertas condiciones para que sea constitucionalmente válida. Al respecto, esta Corporación ha señalado que la respuesta de la autoridad debe ser: "(i) clara, esto es, inteligible y contentiva de argumentos de fácil comprensión; (ii) **precisa, de manera que atienda directamente lo pedido sin reparar en información impertinente y sin incurrir en fórmulas evasivas o elusivas**; (iii) congruente, de suerte que abarque la materia objeto de la petición y sea conforme con lo solicitado; y además (iv.) consecuente con el trámite que se ha surtido, de manera que, si la respuesta se produce con motivo de un derecho de petición formulada dentro de un procedimiento del que conoce la autoridad de la cual el interesado requiere la información, no basta con ofrecer una respuesta como si se tratara de una petición aislada o ex Novo, sino que, si resulta relevante, debe darse cuenta del trámite que se ha surtido y de las razones por las cuales la petición resulta o no procedente..."

3.4. Del derecho al habeas Data.

La aseguradora también ha incurrido en una violación al habeas data que se configura, con el supuesto de cancelar un seguro de vida, cuando nunca fue solicitada tal actuación, además, no informó de ello a mi representada y contradiciéndose, al seguir haciendo los cobros por ese concepto. En concordancia a la ley del habeas data, estas informaciones que suministradas deben ser comprobables y actualizadas, y sin explicaciones se niega a entregar la prueba de ello.

Ley 1266 de 2008.

"...ARTÍCULO 1º. Objeto. La presente ley tiene por objeto desarrollar el derecho constitucional que tienen todas las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos, y los demás derechos, libertades y garantías constitucionales relacionadas con la recolección, tratamiento y circulación de datos personales a que se refiere el artículo 15 de la Constitución Política, así como el derecho a la información establecido en el artículo 20 de la Constitución Política, **particularmente en relación con la información financiera y crediticia, comercial, de servicios** y la proveniente de terceros países..."

"...ARTÍCULO 8º. Deberes de las fuentes de la información. Las fuentes de la información deberán cumplir las siguientes obligaciones, sin perjuicio del cumplimiento de las demás disposiciones previstas en la presente ley y en otras que rijan su actividad:

1. **Garantizar que la información que se suministre a los operadores de los bancos de datos o a los usuarios sea veraz, completa, exacta, actualizada y comprobable.**

2. Reportar, de forma periódica y oportuna al operador, todas las novedades respecto de los datos que previamente le haya suministrado y adoptar las

demás medidas necesarias para que la información suministrada a este se mantenga actualizada.

3. Rectificar la información cuando sea incorrecta e informar lo pertinente a los operadores."

3.5. De la obligación de no extender los siniestros.

Aunado a lo anterior, el Decreto 410 de 1971 –Código de Comercio-establece en el Título V “del contrato de seguro” la obligación de evitar la extensión y propagación del siniestro, según el cual; ocurrido el siniestro, el asegurado estará obligado a evitar su extensión y propagación, y a proveer al salvamento de las cosas aseguradas.

El asegurador se hará cargo, dentro de las normas que regulan el importe de la indemnización, de los gastos razonables en que incurra el asegurado en cumplimiento de tales obligaciones.

Por lo anterior, se sigue presentando la vulneración a derechos fundamnetales y un desacato de las órdenes judiciales.

IV. PRUEBAS Y ANEXOS

- El fallo de tutela emitido por su despacho el día 24 de marzo de 2023 y notificada el 28 de marzo de 2023.
- La respuesta incompleta de BBVA SEGUROS S.A.

V. NOTIFICACIONES

Para los efectos procesales correspondientes, se puede notificar a las partes de tal manera:

5.1. Accionante: Recibo notificaciones en la dirección Carrera 5 N.º 71 – 45 oficina 401 o al correo electrónico notificaciones@rcfclegal.com

5.2. Accionada: BBVA SEGUROS COLOMBIA S.A y BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A., reciben notificaciones en la Carrera 7 N.º 71 – 52 Torre A, piso 12 notifica.co@bbva.com

Del Señor Juez,



WILSON GERLEY CÁRDENAS NONSOQUE
C.C. N.º 80.732.534 de Bogotá D.C.